



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA DE DECISIÓN CIVIL**

**MAGISTRADA PONENTE**  
**ALBA LUCÍA GOYENECHE GUEVARA**

Medellín, treinta de junio de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05001 31 03 010 2021 00071 01
Proceso.	Verbal (Responsabilidad civil contractual)
Demandante.	Alicia Aguilar de López
Demandados.	Jaime Humberto Arcila y otra.
Procedencia.	Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín
Decisión.	Confirma auto que rechazó nulidad
Tema.	Nulidad por pérdida de competencia. Art. 121 del C.G.P.
Rdo. interno.	003-23
Interlocutorio No.	120-23

**ASUNTO A RESOLVER**

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la demandante Alicia Aguilar de López en contra del auto del 13 de septiembre de 2022, mediante el cual se rechazó de plano la solicitud de declaratoria de nulidad de lo actuado después del 21 de julio de 2022, por cuando se cumplió el año de haber sido notificados los demandados, sin que se haya proferido el fallo después de ese término; al interior del proceso verbal de Responsabilidad Civil Contractual por ella instaurado en contra de Jaime Humberto Arcila Posada y María Leonor Calle Whiter.

Busca la actora que se revoque la decisión de primer grado, para que en su lugar se de aplicación objetiva al término previsto en el artículo 121 del C. General del Proceso, declarando la nulidad del trámite practicado sin competencia para ello, esto es, desde el 21 de julio de 2022, y, por ende, el juzgado se declare incompetente para seguir conociendo del proceso.

**PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

1. Es admisible el trámite de la alzada, por expresa previsión del artículo 321, numeral 6º del Código General del Proceso.

2. **De la nulidad procesal.** Esta figura fue instituida por el legislador como el mecanismo a través del cual se pueden remediar las irregularidades procesales, con el fin de procurar el enderezamiento del trámite en la forma que legalmente se establece, en aras de permitir que pueda dictarse una decisión de fondo; sin embargo, solo es viable alegar las causales que expresamente fueron enunciadas en el precepto 133 del Código General del Proceso, ante el acogimiento del principio de la **taxatividad en materia de nulidades**, según el cual, "*sin norma expresa no hay nulidad*" (*pas de nullité sans texte*).

Igualmente, se reguló la oportunidad, trámite y requisitos que deben observarse, por la parte que pretenda formular solicitud en este sentido en los artículos 134 y 135 del mismo compendio normativo.

Finalmente, en los preceptos 135, 136 y 137 del citado Código, se establecieron los casos en los cuales se entiende saneada la nulidad que eventualmente haya podido configurarse en el trámite procesal, así como los efectos de su declaratoria.

3. **De la nulidad por la pérdida de competencia.** Estableció el artículo 121 del Código General del Proceso, que entró en vigencia el 1º de enero de 2016, que el término para dictar sentencia de primera o única instancia, no podía ser superior a un (1) año, contado desde la notificación de la admisión o mandamiento ejecutivo a la demanda; y seis (6) meses, en segundo grado, contados a partir de la recepción del expediente por la secretaría de la respectiva dependencia judicial, y que en el evento de fenecer dicho plazo "*sin haberse dictado la providencia correspondiente*", el juez que estuviera conociendo del asunto, perdería competencia para seguir haciéndolo, debiendo remitir el respectivo expediente al juez o magistrado que siguiera en turno, para que éste asumiera la competencia y procediera a proferir la providencia respectiva en un término máximo de seis (6) meses.

Ahora, el inciso 6º de la citada preceptiva, contempló en su génesis, "*Será nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia*"; sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C-443 del 25 de septiembre de 2019, al examinar la constitucionalidad de dicho inciso, declaró la INEXEQUIBILIDAD de la expresión

“de pleno derecho” y expuso como argumentos de su decisión, el que la misma desconocía principios constitucionales, tales como, la resolución oportuna de las controversias judiciales, la eficiencia en las funciones estatales, la prevalencia del derecho sustancial, y el derecho de acceso a la administración de justicia.

Y en sentencia T-341 de 2018, se planteó el análisis constitucional del tópico de la 'saneabilidad', cuando quiera que la misma no fue invocada antes de proveerse sentencia, puntualizando así, los eventos en que, en forma ninguna, lo obrado podrá ser convalidado y dará en contrario, lugar inmediato a la pérdida de competencia, abonándose como sub-reglas para el éxito de la nulidad, las siguientes:

*"i) Que la pérdida de competencia se alegue por cualquiera de las partes antes de que se profiera sentencia de primera o de segunda instancia.*

*ii) Que el incumplimiento del plazo fijado no se encuentre justificado por causa legal de interrupción o suspensión de/proceso.*

*iii) Que no se haya prorrogado la competencia por parte de la autoridad judicial a cargo del trámite para resolver la instancia respectiva, de la manera prevista en el inciso quinto del edículo 121 del CGP.*

*iv) Que la conducta de las partes no evidencie un uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa judicial durante el trámite de la instancia correspondiente, que hayan incidido en el término de duración del proceso.*

*v) Que la sentencia de primera o de segunda instancia, según corresponda, no se haya proferido en un plazo razonable".*

4. En el sub júdice, arguye la recurrente que es claro que, al no haberse dictado fallo de primera instancia al primero de julio de 2022, cuando se cumplió el año dentro del cual tenía que hacerlo, el juzgado perdió ipso iure competencia para continuar tramitando el asunto; además, todo lo actuado desde el dos de julio de 2022, es nulo de pleno derecho.

Al respecto, debe indicarse que el rechazo de la nulidad antes referenciado fue cimentado por el a quo, en el hecho de que el proceso reviste cierta complejidad, teniendo en cuenta que se ha presentado demanda de reconvención y dos llamamientos en garantía, uno de los cuales se admitió el 12 de septiembre de 2022. Además, la parte demandante allegó un poder para el proceso principal y aportó contestación a la demanda de reconvención, por tanto, saneó la nulidad ya que actuó sin proponerla.

En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia arriba citada, consideró que la posición en el sentido de que, “la nulidad que se genera con el artículo 121 del C. General del Proceso, no puede pasar por alto el criterio de prevalencia del derecho sustancial, y por tal motivo, la regla debe ser la eficacia y prevalencia del procedimiento, y la excepción la posibilidad de invalidarlo”, era constitucionalmente la más ajustada.

Del expediente digital se evidencia que, la parte demandada presentó demanda de reconvención, la cual fue admitida por auto del 28 de febrero de 2022, un primer llamamiento en garantía admitido el 25 febrero y un segundo, con admisión de fecha 12 de diciembre de la misma anualidad, lo que para la Sala es razón suficiente para no proceder a la declaratoria de la nulidad petitionada por la demandante.

Ello por cuanto la práctica de dichos trámites, ha implicado una mayor duración del litigio; además, no se observa morosidad por parte del Juez de primera instancia en el adelantamiento del proceso, y, por el contrario, lo que sí podría generar demoras sería acceder a la petición de la actora, pues ello implica retrotraer actuaciones y el envío del expediente a otro despacho para que inicie su estudio desde cero.

Estas contingencias o trámites adicionales que surgieron al interior del proceso, han sido obstáculo para resolver el litigio en el interregno indicado en la norma, sin embargo, se han proferido los proveídos correspondiente tendientes a finiquitar el asunto, que en últimas es lo que interesa a ambas partes.

En sentir de la Sala, aplicar la nulidad de manera automática, en los términos como lo solicita el apoderado de la parte demandante, tendría consecuencias negativas para las partes, porque influiría en la celeridad del presente asunto, cuyo objetivo primordial ostenta el artículo 121 del C. General del Proceso.

Al respecto, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-334 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera:

*“...5.6. Como fundamento de las anteriores determinaciones, esta Corte explicó que la nulidad automática de las actuaciones extemporáneas contenida en el artículo 121 del CGP es una figura que no contribuye positivamente al propósito de garantizar una justicia oportuna, debido a que:*

- (i) No tiene en cuenta que existen diferentes vicisitudes que se pueden presentar en el transcurso del proceso y que el juez no puede evitar a pesar de su incidencia en la duración del trámite y el vencimiento del plazo para decidir. Este sería el caso de los jueces que tienen importantes cargas de trabajo, cuando ocurren dificultades en la*

*práctica de pruebas periciales, ante la complejidad del debate jurídico, o si las audiencias se tienen que postergar ante la inasistencia justificada de las partes.*

- (ii) *El régimen general de nulidades procesales contempla diferentes aspectos con los cuales se busca una equivalencia entre el debido proceso y el principio de celeridad, esto se refleja en el saneamiento, requisitos, oportunidad y trámite para interponer la nulidad. Sin embargo, la nulidad automática en cuestión puede resultar contradictoria ya que se opone al objetivo de promover la celeridad en los procesos, el cual es precisamente la razón de ser del artículo en objeto de análisis.*
- (iii) *Las consecuencias de aplicar las reglas de la norma en cuestión tienden a que se genere una discusión jurídica sobre la validez de la actuación extemporánea y esto causa más complicaciones y demoras en el proceso, pues se deben agotar las instancias para la reclamación, e inclusive es viable su análisis vía tutela.*
- (iv) *La nulidad de pleno derecho que contempla el artículo en comento podría convertirse en una amenaza a los derechos fundamentales, en razón de que:*
  - a) *El juez del asunto podría verse abocado a utilizar la figura de forma indeseable con el fin de evitar el vencimiento del plazo, es decir, podría limitar actuaciones que considere que generen una tardanza al proceso, hacer un uso desmedido de medidas como la suspensión del proceso, o proferir decisiones apresuradas, todo con el fin de evitar una decisión extemporánea.*
  - b) *Cuando el caso tenga que ser asignado a otro funcionario, esto puede implicar que este deba emplear un mayor esfuerzo en familiarizarse con un proceso en el cual no ha intervenido ni practicado pruebas, y en cumplir con su propia carga laboral.*
  - c) *El uso textual del citado artículo puede causar que las partes se aprovechen de sus vacíos para realizar actos que vayan en contra de la lealtad procesal, como sería el caso de que se establezca la estrategia de guardar silencio sobre el vencimiento del plazo hasta cuando se tenga certeza de una decisión contraria a los intereses, para ahí sí alegar la nulidad...”.*

Es así que, la nulidad alegada con fundamento en la pérdida de competencia de que trata el precepto 121 antes citado, resultaba improcedente, debiendo ser rechazada de plano como lo definió el a quo.

## CONCLUSIÓN

En consecuencia, se **confirmará** la decisión apelada por la razón expresada en la motivación de la misma.

Se condenará en costas a la demandante Alicia Aguilar de López, a favor de la parte demandada, al tenor de lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, las cuales serán liquidadas por el juzgado de origen, conforme lo contemplado en el inciso 1° del precepto 366 *ibídem*.

Como agencias en derecho se fijará la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.000), que equivalen a un salario mínimo legal mensual vigente, conforme lo regulado en el artículo 5º, numeral 1º del Acuerdo PSAA16-10554 del cinco de agosto de 2016.

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,

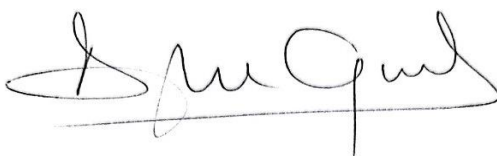
**RESUELVE.**

**PRIMERO. CONFIRMAR** el auto del 13 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual rechazó de plano la solicitud de nulidad elevada por la demandante Alicia Aguilar de López, con fundamento en la pérdida de competencia de que trata el artículo 121 del Código General del Proceso, por las razones indicadas en dicha providencia.

**SEGUNDO. CONDENAR** a la recurrente, Ana Aguilar de López al pago de las costas causadas en esta instancia, a favor de los demandados, por haberle resultado desfavorable la decisión de la apelación promovida por la misma.

**TERCERO. FIJAR** como agencias en derecho la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS (\$1.160.0000), que equivalen a un salario mínimo legal mensual vigente, la cual será tomada en cuenta en la liquidación de costas que realice el juzgado de origen.

**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**



**ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA**  
**Magistrada**

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022